

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



JUZGADO TREINTA Y OCHO CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTÁ D. C.

Carrera 10 n.º 14-33 piso 11

cmpl38bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Exp. No. 110014003038-2024-00093-00

PROCESO: Ejecutivo Singular

DEMANDANTE: Grupo Jurídico Deudu S.A.S.

DEMANDADO: Yolanda Elvira Barrientos Daza

Para todos los efectos legales a que haya lugar téngase en cuenta que la demandada Yolanda Elvira Barrientos Daza se notificó por conducta concluyente en los términos del inciso primero del canon 301 del Código General del Proceso.

Se reconoce al abogado Jesús Dianor López López, como apoderado judicial de la parte ejecutada en los términos y para los fines del poder conferido.

Se procede a decidir el recurso de **REPOSICIÓN** propuesto por la demandada representada por curadora da litem, contra el proveído de 26 de febrero de 2024, mediante el cual se libró mandamiento de pago.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Aduce el inconforme que debe revocarse el mandamiento de pago proferido el 26 de febrero de 2024, por las siguientes razones (i) el pagaré No. 05471308981782499, fue firmado en blanco desde el año 2010, por lo que el Banco Davivienda tenía hasta el 31 de julio del 2011 para presentarlo para el cobro, lo cual no efectuó, (ii) respecto del pagaré no. 1-00003058838, firmado en blanco el 12 de abril del 2011. Esto indica que el Banco tenía hasta el 12 de

abril del 2012 para hacerlo exigible, (iii) las obligaciones contenidas en los pagarés base de ejecución se encuentran prescritas; (iv) el despacho carece de competencia para conocer del trámite ejecutivo de la referencia, como quiera que el domicilio de demandado es la ciudad de Medellín, a su vez el diligenciamiento del instrumento se efectuó en dicha municipalidad, por lo que Bogotá nada tiene que ver.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA

1. Cuando se pretenda atacar el mandamiento de pago, los planteamientos del respectivo recurso deben ir exclusivamente encaminados a enervar el título ejecutivo, pues cuando el Juzgador libra la orden de apremio, lo hace con base en la calificación puramente objetiva del título que sirve de base a la ejecución, por lo tanto, si se pretende la revocatoria del mencionado auto, necesariamente la inconformidad debe estar encaminada en **(i) controvertir los requisitos formales del título; (ii) solicitar el beneficio de excusión, y (iii) proponer excepciones previas**; ello se infiere de la previsión señalada en el inciso 2º del artículo 430 del Código General del Proceso.

Frente al primer escenario, es necesario recordar que los títulos ejecutivos poseen dos tipos de condiciones, a saber: (i) formales y (ii) sustanciales. Las primeras, esto es, las formales, exigen **que el documento objeto de recaudo sea auténtico y que emane del deudor o su causante, de una sentencia de condena proferida por los jueces y magistrados de cualquier jurisdicción, de otras providencias judiciales o las dictadas en procesos policivos que aprueben liquidación de costas o señalen honorarios, o de un acto administrativo en firme**¹. Por su parte, las condiciones sustanciales exigen que el título contenga una prestación en beneficio de una persona, ya sea de dar, hacer, o de no hacer, la cual, además, debe ser clara, expresa y exigible².

De acuerdo con la anterior distinción, el artículo 430 de la Ley 1564 de 2012 dispuso que las controversias sobre los requisitos formales del título ejecutivo

¹ Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-747 del 24 de octubre de 2013, Mp. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

² Ibídem.

sólo se podrían ventilar mediante recurso de reposición impetrado contra el auto que libre mandamiento de pago.

Respecto al segundo escenario, huelga recordar que el beneficio de excusión, a la luz del artículo 2383 del Código Civil, corresponde a la facultad que recae en cabeza del fiador, en virtud de la cual puede exigir que antes de proceder ejecutivamente contra él, se persiga la deuda en los bienes del deudor principal.

Finalmente, en relación al tercer escenario, esto es, las excepciones previas, el artículo 100 del Código General del Proceso establece que el demandado podrá proponer como tales las siguientes:

"Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:

- 1. Falta de jurisdicción o de competencia.*
- 2. Compromiso o cláusula compromisoria.*
- 3. Inexistencia del demandante o del demandado.*
- 4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.*
- 5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.*
- 6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.*
- 7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.*
- 8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.*
- 9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.*
- 10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.*
- 11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada".*

No obstante, lo anterior, las excepciones previas contempladas en el referido artículo no pueden ser considerada como enunciación taxativa, sino meramente enunciativa. De allí que el criterio para determinar cuándo se está en presencia de una excepción previa es su naturaleza. Por ende, si la excepción está

encaminada a corregir el procedimiento y sanear las fallas formales iniciales (tales como jurisdicción, competencia, capacidad de las partes, entre otras) esta debe ser tramitada como previa³, mientras que, si la misma busca enervar las pretensiones de la demanda, su tratamiento será el de una excepción de mérito.

3. En el sub-judice, la parte demandada interpone recurso de reposición contra el auto de mandamiento de pago proferido en este proceso, planteando la "caducidad de la acción ejecutiva", la prescripción y la falta de competencia del despacho por el factor territorial.

Frente a los argumentos denominados caducidad de la acción ejecutiva, el Despacho encuentra que constituye verdadera excepción previas, ya que está encaminada a corregir el procedimiento. De allí que el recurso de reposición impetrado sea la vía adecuada para determinar si dichos argumentos tienen o no vocación de prosperidad en el sub lite.

3.1. Caducidad de la acción ejecutiva:

Para entender esta figura es necesario remitirse al canon 787 del Código de Comercio, que reza:

"Caducidad de la acción cambiaria de regreso del último tenedor

La acción cambiaria de regreso del último tenedor del título caducará:

1) Por no haber sido presentado el título en tiempo para su aceptación o para su pago, y

2) Por no haber levantado el protesto conforme a la ley".

A partir de lo anterior, debe tener en cuenta el recurrente que los obligados cambiarios directos no pueden oponer la excepción de caducidad.

Ahora, es importante precisar quienes son obligados cambiarios directos y de regreso en el título valor-pagaré, pues bien, los primeros se relacionan con el otorgante, es decir el girador y los avalistas de estos.

³ bídem

Así las cosas, no le es dable a la demandada como otorgante de los pagarés base de ejecución, alegar la excepción de caducidad de la acción cambiaria, como quiera que los únicos facultados para oponerse a través de este medio exceptivo son los obligados cambiarios de regreso.

Por lo anterior el medio exceptivo formulado está llamado al fracaso.

3.2. Ahora, en lo que respecta a la **excepción de prescripción** formulada por la demandada, debe tenerse en cuenta que el reparo formulado no ataca los requisitos formales de título, sino que va enfocado a atacar las pretensiones de la demanda, de tal forma que al ser un asunto que determina la constitución de la obligación, el mismo pareciera que debía ser alegado a través de la herramienta legal dispuesta para ello, esto es, excepciones de mérito.

Fíjese que en razón de las normas citadas se pudiera concluir que solo pueden alegarse por vía de reposición contra el mandamiento de pago las discusiones que se centren en dilucidar la existencia de requisitos formales que puedan poner en duda que se trate de un título claro, expreso y exigible, además del beneficio de exclusión y de excepciones previas (véase el artículo 100 del C.G.P.), esto es, vicios que no puedan invocarse como excepción de mérito en la etapa procesal oportuna.

Téngase en cuenta que la prescripción tiene mucho que ver con uno de los requisitos sustanciales como es la exigibilidad de la obligación.

Así las cosas, el reparo formulado no está llamado a prosperar.

3.3. Finalmente, respecto a la excepción de falta de competencia por el factor territorial, nos debemos remitir al artículo 28 del C.G.P. numeral 1º, en donde se establece que, salvo disposición legal en contrario, en todo proceso contencioso será competente **el juez del domicilio del demandado**; sin embargo, el numeral 3º indica que, en los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren **títulos ejecutivos**, es también competente **el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones**.

La H. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, en reiteradas ocasiones a dispuesto que:

*"[P]ara las demandas derivadas de un negocio jurídico o de títulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (Fórum domicilium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante **el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones** (Fórum contractui). Por eso ha doctrinado la Sala que el demandante con fundamento en actos jurídicos de «alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor"(AC2421 19 abr. 2017 rad. 2017-00576-00) resaltado por el Despacho.*

En el caso bajo estudio, una vez analizados los instrumentos base de ejecución se determina que el lugar cumplimiento de las obligaciones es la ciudad de Bogotá, tal como se observa a continuación:

PAGARÉ No. [] 1-00003058838

Capital \$ 63.488.000
Intereses de Mora \$ 0
Lugar de Pago: Bogotá DC

Intereses de Plazo \$ 0
Fecha de Vencimiento: 1-Enero-2024

Yo, Yolanda Elvira Barrientos Daza, mayor con domicilio en Medellin, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi propio nombre, declaro de manera expresa por medio del presente instrumento que SOLIDARIA e INCONDICIONALMENTE pagaré al **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, o a su orden, en sus oficinas de Bogotá DC, el día 1 de Enero de 2024, las siguientes cantidades:

Así las cosas, la parte actora se encontraba facultada para incoar la demanda ejecutiva ante los Jueces Civiles Municipales de Bogotá, de conformidad con lo previsto en el numeral 3° del artículo 28 del Código General del Proceso.

Por lo anterior la excepción formulada está llamada a fracasar.

4. Es evidente que los argumentos desplegados en el recurso de reposición para atacar la orden de apremio no son suficientes para desestabilizarlo por lo que la decisión censurada ha de mantenerse en su totalidad.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogotá,

RESUELVE

ÚNICO: MANTENER incólume la providencia de fecha 26 de febrero de 2024, por las razones expuestas.

Una vez ejecutoriado el presente proveído ingrésese al despacho a fin de continuar el trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



ELVER ROLANDO RAMIREZ VARGAS
Juez

<p>Rama Judicial del Poder Público JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.</p> <p>La presente providencia se notifica por anotación ESTADO No. 043 del 19 de junio de 2024</p> <p> LUIS ALBERTO CARDOZO Secretario</p>
